

nes a partir del ejercicio del poder político y su correspondiente legitimidad. Coincido con él y con González Oropeza (1993); por ello en este trabajo me centraré en el desempeño político del gobernador Víctor Cervera Pacheco, quien desafió al poder central enarbolando la causa democrática, cuando en su ámbito de gobierno reforzó los esquemas autoritarios de poder² para combatir frontalmente el avance de los partidos políticos de oposición y la democracia. Nada nuevo en él, realmente, porque la clave de su éxito fue la combinación del uso de la fuerza con el paternalismo político.

Analizaré enseguida, *grosso modo*, las condiciones que han permitido no sólo a Cervera Pacheco, sino a los gobernadores, recuperar el poder perdido frente al gobierno central de la república, y al mismo tiempo revivir las formas caciquiles de poder que parecían ya exterminadas a fines de la década de los setenta (por ejemplo, Roberto Madrazo, en Tabasco). Posteriormente formulo una explicación de sus victorias, a fin de cuenta pírricas, por su relación con la derrota del cerverismo sufrida en las urnas el 27 de mayo de 2001.

Ya dije que no es mi propósito una biografía ni el recuento exhaustivo de los actos de gobierno del señor Cervera Pacheco. Además, por razones de espacio seré puntual y esquemático. Privilegiaré el análisis de la recomposición del poder en el ámbito de las élites políticas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con lo cual dejo fuera muchos factores y actores sociales que participan en el proceso de transición. En la tercera y última parte de este ensayo apunto algunas reflexiones acerca el papel insoslayable de la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas en la transición mexicana.

Cuando pasan acontecimientos como los del 2 de julio de 2000 (gana Vicente Fox) y luego los de mayo de 2001 (pier

2 Víctor Manuel Durand define el autoritarismo mexicano como un vasto sistema institucional y normativo, formal e informal, encabezado por una presidencia todo poderosa (Durand Ponte, 1995: 67-76).

de Cervera), resulta muy fácil ubicar la frontera de los cambios políticos en México, pero cuando los datos son la descomposición de un viejo régimen, el enfrentamiento de fracciones y las luchas de las élites burocráticas, se complica saber hacia dónde va el país.

No obstante, una cosa parece clara: los restos de ese país autoritario de grupos y mafias políticas, de saqueos económicos y abusos de poder, no desaparecerán con la velocidad que se necesita para empezar a jalonar hacia otro futuro. Cuando se afirma que lo único que cambió con el 2 de julio es el partido en el poder, se pueden establecer múltiples diferencias y desacuerdos.

Sin embargo, hay que admitir que hoy en día tenemos más expectativas y deseos de cambio que evidencias fundadas, o hechos palpables. Si miramos las experiencias regionales de alternancia en el poder podemos concluir que hay modificaciones importantes en la operación y en la forma de gobernar, y al mismo tiempo quedan otras realidades que no han sido tocadas o que dependen de los espacios federales del gobierno. Del lado de la sociedad hay comportamientos que muestran cambios en su cultura política, pero la eficacia de la clase política en la actual coyuntura es todavía una promesa.

La postura del PRI y de Víctor M. Cervera Pacheco de no reconocer su derrota electoral muestra de manera patética el extremo al que se puede llegar en un sistema político que se acostumbró a no perder el poder. Este tipo de personajes no se explican de forma aislada; son, en su forma de operar y en sus estrategias, voz y expresión de un sistema en decadencia. Vale la pena aclarar que más allá de los enfrentamientos y prepotencia personales, el caso de Yucatán tiene una representación emblemática tanto para su partido como para su proyecto y las redes de intereses a su alrededor. Si preguntamos sobre el país que permitió este tipo de personajes, vamos a llegar a instituciones que

posibilitan, como lo han hecho desde hace decenios, un manejo muy discrecional del poder.

Territorio y poder político

Quiero remarcar ahora que la relación orgánica de dos instituciones que crecieron como hermanas siamesas, el PRI y el gobierno, es un complejo que presenta varios frentes de acción, los cuales sólo pueden ser separados para fines de análisis. Enseguida trataré de explicar cómo y por qué resurge en los últimos dos decenios el poder político sobre la base del control del territorio o los espacios en la escala regional.

La literatura especializada coincide en señalar que el meollo del casi nulo federalismo practicado en el México contemporáneo no está en las leyes o las instituciones, sino en la esfera de competencia entre los órdenes de gobierno federal y estatal. El poder federal en los hechos se impuso, especialmente el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente de la república, a tal punto que anuló los contrapesos teóricamente previstos en la Constitución política vigente. De este modo, el centralismo y el presidencialismo fueron las características principales del régimen político mexicano de 1910 a 2000.

Tal régimen, con el paso del tiempo fue perdiendo legitimidad, y así, desde finales de los sesenta le llovieron las críticas de todos lados. Por supuesto, se hicieron muchas reformas institucionales cuyos alcances y efectividad fueron efímeras. Más recientemente, las élites burocráticas, ya sea del gobierno o del PRI, para tratar de conservar su hegemonía han impulsado un nuevo orden territorial: una suerte de descentralización, por cierto más efectiva que cuando se pusieron en marcha unas políticas públicas con ese fin. Al mismo tiempo, el modelo urbano-industrial ha ido perdiendo su encanto, no sólo por la contaminación, la

violencia y la inseguridad de las grandes ciudades, sino también por su significado cultural centralizante. De modo que a fines del milenio, varios intereses y condiciones convergen en la reconfiguración de los escenarios regionales (Hiernaux, 1994; Azis, 1999; Gouëst, 1997) y no sólo la cuestión política.

Como resultado de ello, entre 1980 y el año 2000, las élites locales y nacionales, aún pertenecientes al mismo partido en el gobierno, tienden a distanciarse, en el entendido de que gradualmente las primeras están marcando el término de la relación en el contexto de la dinámica nacional (Alvarado Mendoza y otros, 1997: 333). Ante la fractura del régimen presidencialista y centralizado, el territorio nacional se fracciona en pequeños feudos (como antes de Calles), desde donde las élites políticas del PRI intentan reconquistar el poder hegemónico. El proceso es complejo y disparejo, por lo cual analizaré solo algunos aspectos del ejercicio del poder político por parte del gobernador Cervera Pacheco.

Con todo y los memorables episodios de luchas democráticas (Carrillo Puerto, Tejeda, Garrido Canabal), en el Sur el poder político ha sido históricamente protagonizado por élites burocráticas, a veces cuestionando clases económicas más acomodadas. Dichas élites burocráticas suelen formar parte de las clases económicas dominantes, pero no son la misma cosa. Los socialismos de Carrillo Puerto o de Garrido Canabal estuvieron muy lejos de plantear la desaparición de los privilegios de las minorías poderosas.

Dentro de esa vieja tradición agrarista, como pocos, Víctor M. Cervera Pacheco, en sus años juveniles, a mediados de los sesenta, se erigió protector de los campesinos. En nombre de ellos, mediante una suerte de moderno “regionalismo” político ha recogido y refuncionalizado parte de las estructuras y remedos culturales del viejo autoritarismo que se desmorona. Siendo el objetivo de las élites políticas bu-

rocráticas del PRI retener el poder sin arriesgar en la arena democrática, en la que no saben jugar; Cervera Pacheco fue el hombre indicado.

Sin embargo, y esto es importante subrayarlo, a contracorriente, un lento avance de la democratización, las pugnas entre las élites y la participación ciudadana, han abierto una gran avenida para el resurgimiento de nuevas estructuras y actores regionales:³ han propiciado la transición. Así, no es difícil entender por qué ante un desgaste de su legitimidad, el poder central (hegemónico del PRI) se ha visto obligado a cambiar su estrategia vertical por una conciliación de las expresiones regionales en vez de imponerlas desde arriba, como era la costumbre⁴

Cervera Pacheco y los tecnócratas | 1980-2000

La dependencia económica yucateca del subsidio federal alcanzó un nivel elevado, hasta indispensable en un momento dado. Por ejemplo, el subsidio a la agroindustria henequenera de 1971 a 1983 se convirtió en la fuente casi primordial de la debilitada economía estatal, y se calcula que experimentó un crecimiento de 5.8 por ciento en términos reales (Brannon and Baklanoff, 1987). Esta derrama de dinero fortaleció la presencia del Estado en sus dos caras de benefactor y autoritario. Al llegar de los tecnócratas al poder en 1984, este déficit que amarraba a Yucatán al poder central hizo llamar la atención de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) —al frente de Carlos Salinas de Gortari—, la cual sugirió ensayar nuevos esque-

3 "En estas circunstancias, se encuentra en curso una realineación de los poderes locales y regionales, cuyos actores y representantes, sobre todo los gobernadores y los partidos políticos, demandan replantear la relación entre la federación y los estados y municipios, fenómeno acompañado por una diversificación de los grupos económicos y de las familias políticas" (Alvarado Mendoza y otros, 1997: 326).

4 Alvarado Mendoza y otros citan casos recientes como los de Jalisco, Michoacán y Guanajuato en 1995 (1997: 332).

mas tendentes a disminuir dicho subsidio para sanear las finanzas públicas, que estaban quebradas.

A principios de los ochenta, el presidente en turno todavía era amo y señor no sólo del gobierno, sino del PRI, por lo cual José López Portillo, aunque ejercía su último año de gobierno, fue capaz de influir en la decisión de quién sería el candidato para gobernar Yucatán de 1981-1986. Al parecer, un veto a los dos precandidatos fuertes —Víctor Manzanilla Schaffer y Víctor M. Cervera Pacheco—, abrió la posibilidad para una resolución salomónica y entró a la escena un tercero, un desconocido (el general Graciliano Alpuche Pinzón) en el ámbito político local. Lo cual no importaba, ya que una vez nombrado candidato, con pleno dominio de la maquinaria electoral por parte del partido oficial, automáticamente resultaba electo gobernador

Tras un análisis cuidadoso de los eventos políticos durante los primeros años del gobernador Graciliano Alpuche Pinzón, uno puede decir que la decisión presidencial se aceptó, pero no se aceptó. En efecto, una lucha subterránea dentro del PRI en Yucatán se hizo visible y cobró fuerza cuando a principios de 1983 se da el cambio del delegado estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), en una coyuntura en la que el nuevo presidente de la república, Miguel de la Madrid, se veía agobiado por una aguda crisis económica (un déficit fiscal alarmante, una inflación de más de dos dígitos y una abultada deuda externa, movilizaciones sociales)⁵ para señalar algunas de las dimensiones más importantes, por lo cual este conflicto “entre facciones campesinas” no ameritó su intervención directa.

El gobernador Alpuche Pinzón y los otros dos hombres fuertes querían colocar a una persona incondicional y de reconocida lealtad en ese puesto clave en el esquema de gobierno. Es por ello que estos tres grupos (alpuchistas,

5 Ver, (Bazdresch y otros: 1992).

manzanillistas y cerveristas) en disputa dentro del partido oficial movilizaron por su parte a los ejidatarios henequeneros principalmente, y propiciaron un clima de inestabilidad que dio como resultado la caída del primer gobernador electo, Graciliano Alpuche Pinzón, apenas a la mitad de su mandato. De la misma forma que se lo dieron le retiraron el cargo, y fue sustituido por Víctor M. Cervera Pacheco.

Al concluir ese sexenio, Víctor Manzanilla Schaffer recibió la oportunidad anhelada y resultó gobernador por el periodo de 1988-1993. Manzanilla, al igual que el general Alpuche era un *yuca-huach*, es decir, un yucateco mayormente radicado en la ciudad de México, y al igual que el general, tampoco terminó su periodo. Su gran pecado fue reconocer antes que el Comité Central del PRI, el triunfo contundente del Partido Acción Nacional (PAN) para gobernar el municipio de Mérida. Con todo y los recursos administrativos y legales era difícil revertir esa victoria proclamada y reclamada por los meridianos, pero fue un buen pretexto para mostrarle a Manzanilla Schaffer que no tenía sus propias fuerzas como para desafiar el poder central. Esta vez, el nuevo gobernador interino nombrado fue un personaje muy identificado con los tecnócratas: la licenciada Dulce María Sauri.

Es importante remarcar que ambas caídas se originaron por pugnas internas dentro del propio PRI, ya que en ningún caso hubo una movilización de la sociedad civil o un protagonismo directo de los partidos de oposición, aunque ya estaban en la escena. Que las cúpulas políticas con la misma facilidad que imponían, quitaban a los gobernadores y durante el sexenio del presidente Salinas este fenómeno alcanzó dígitos sin precedente.

Durante sus tres años de gobierno, a Víctor Manzanilla Schaffer, más por su afinidad con la derecha que con el salinismo, le tocó echar para atrás varias de las conquistas sociales obtenidas por la lucha de los campesinos

henequeneros. Individualizó los ejidos colectivos y reprivatizó Cordemex (Baños, 1995). Seguidamente, Dulce María Sauri dispuso en febrero de 1992 la indemnización de los ejidatarios henequeneros, y así finalizó por completo los subsidios del gobierno a esa rama de la producción. El Pronasol llegó a Yucatán al poco tiempo, a fines de 1992, cuatro años después de su creación, casi de la misma forma como llegó a Chiapas en 1994, como una panacea para disuadir el descontento social emergente.

Entre 1993 y 1994 hubo un periodo de gobierno de solamente dieciocho meses. Esto, con el objeto de correr el calendario electoral para que el candidato no fuera nombrado por un presidente saliente y siguiera ocasionando las caídas de gobernadores electos. No obstante, parece que fue una medida tardía, cuando el poder presidencial ya estaba disminuido. Tan así es, que Víctor M. Cervera Pacheco, fue nombrado candidato a gobernador (1995-2001) pese a la no aprobación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En el pasado, aquellos que eran nombrados por el PRI candidatos a los puestos de elección popular casi siempre resultaban ganadores mediante los votos.

En México es probablemente uno de los pocos, si no el único personaje, que ha ejercido el poder de su estado natal en dos ocasiones. Primero fue *nombrado* gobernador interino por un periodo de tres años, de 1984 a 1987, y posteriormente, resultó *elegido* en una contienda electoral bien apretada llevada a cabo en 1995.

Evidentemente, Cervera Pacheco no es un advenedizo; su carrera política comienza a mediados de los sesenta como líder estudiantil, y fue presidente municipal de Mérida, diputado federal y senador de la república, y en varias ocasiones había buscado sin éxito ser nombrado el candidato y, por ende, el puesto de gobernador

En aquella primera ocasión fungía como presidente de la CNC, y en medio de un conflicto de porte “campesino” que

amenazaba la estabilidad política de la entidad, fue seleccionado por el PRI-gobierno como el hombre más adecuado para esas circunstancias dadas. Como hicieron los franceses llamando a un Napoleón (III), este Cervera Pacheco recibía el poder evocando la figura simbólica de aquel Cervera Pacheco que en su juventud había sido un líder fogoso a favor de los campesinos yucatecos. Ya en el ejercicio del poder, se aproximó a lo que algunos politólogos llaman bonapartismo: gobernó en nombre de los campesinos, pero a favor de otros grupos sociales, mediante un proyecto agresivo de desarrollo urbano-industrial respaldado por los tecnócratas desde la SPP.

En nombre de los campesinos henequeneros (para ese entonces un núcleo organizado fuerte) se puso en marcha en 1984 un Programa de Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán, que contó con recursos “extraordinarios” del gobierno federal. Las inversiones recordadas a la agroindustria henequenera fueron canalizadas hacia la infraestructura portuaria y pesquera; hacia un nuevo parque para industrias “no contaminantes”; y hacia la promoción de la industria turística. De esta forma, se dijo, algunos campesinos, directa o indirectamente, recibirían la oportunidad de nuevos empleos, y con ello la de mejorar sus condiciones de vida.

En su segundo turno, después de haber fungido como Secretario de la Reforma Agraria durante el sexenio del presidente Carlos Salinas (1988-1994), el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se oponía a la candidatura de Cervera, argumentando que el estigma social negativo del salinismo lo haría perder. Además, se temía que su ambigua situación legal como candidato podría sacarlo de la jugada. No obstante, las élites burocráticas locales del PRI, en abierto desafío al Comité Ejecutivo Nacional, de entre otros cuatro precandidatos (todos ellos sus ahijados políticos) designa-

ron al propio Cervera, al líder indiscutible, candidato para el periodo 1995-2001.

Esta “rebelión” yucateca contra elCEN del PRI, impensable apenas un año atrás, es un hecho de la mayor importancia, un claro indicador de la nueva correlación de fuerzas entre las élites burocráticas nacionales y las locales, en el que las últimas toman la delantera. El argumento de los cerveristas fue la real amenaza que representaba el Partido Acción Nacional (PAN), el cual había ganado terreno en las últimas elecciones (Baños, 1996). *A posteriori*, se puede decir que Cervera Pacheco tuvo razón, ya que en las siguientes elecciones de 2001, sin un personaje carismático como él, su partido perdió el poder.

Como suele ocurrir en la mayoría de los casos, Cervera Pacheco no era portador de una propuesta de gobierno muy elaborada, y menos aún, novedosa. Su meta era simplemente ganar las elecciones en medio de una coyuntura cargada de incertidumbres. En efecto, la contienda de 1995, ya organizada bajo el nuevo diseño de “ciudadanización” de los órganos electorales, por escaso margen fue ganada por Cervera Pacheco.

Con todo y la compra del voto de la población más decaída y debido a la disminución del fraude electoral y al proceso mismo de transición del país, Cervera Pacheco ganó con una diferencia de apenas algo más de veinte mil votos frente al candidato del Partido Acción Nacional (PAN). El PRI obtuvo 48.84 por ciento y el PAN 44.48 por ciento del total de los votos emitidos (Aguilar Laviada y Herrera Buchanan, 1995; Reyes Soto, 1995: 41). En cambio, su antecesor, Federico Granja Ricalde, había obtenido una ventaja de cerca de cien mil votos.

Tal resultado envió señales muy claras al PRI de que su contrincante estaba ya tocando las puertas del poder. El PRI sabe muy bien que su base social no es la clase media, sino los trabajadores de alguna forma todavía bajo el con-

trol corporativo (Confederación de Trabajadores de México, Confederación Nacional Campesina, etcétera) y de las cúpulas “indígenas”, como de la Confederación de Pueblos Mayas. Aun así, al inicio de su mandato se dedicó a consolidar los programas de diversificación y a concluir el proyecto que había puesto en marcha en 1984.

Pragmático como es, a la sombra de un juicio político debido a la supuesta violación de la Constitución por sus dos periodos de gobierno, que no se esfumó y que al contrario cobró fuerza hacia mediados de su periodo, buscó una tabla de salvación. Cuando arreciaba el riesgo de tal juicio, por la renovación del Congreso local, impulsó la instalación de maquiladoras en el medio rural y capitalizó las oportunidades abiertas por el Tratado de Libre Comercio que había entrado en vigor en 1994. Esa estrategia, combinada con una imagen benefactora de su gobierno, como veremos enseguida, la rindió muy buenos resultados electorales.

Asegurando votos duros

Antes de la derrota de 2001, en 1998 el gobernador Cervera Pacheco había recurrido con éxito a una estrategia que no fue suficiente para asegurar el triunfo de su candidato en las elecciones de 2001.

El recorte drástico de subsidios a la agroindustria henequenera logrado por el Programa de Reordenación Henequenera... de 1984, así como la modificaciones en la forma de propiedad a partir de 1990, resquebrajaron parte de las viejas estructuras municipales y ejidales de poder del PRI. Muchos líderes ejidales —que solían desviar fondos para sus intereses personales—, parte de una cadena de corruptelas, que militaban en el PRI por conveniencia, fueron desplazados.

En algunos casos, incluso fueron apuntados como causantes de algunos descalabros. Ante tal arremetida por parte

del gobierno, y del PRI, naturalmente, muchos de estos líderes no se quedaron con los brazos cruzados, y en forma más que *personal* se lanzaron a la lucha por conservar el poder, dentro o fuera del PRI, a través de cualquiera de los partidos de oposición (Baños, 1996; Vallado Fajardo, 1999).

Así, las últimas elecciones municipales de “carro completo” para el PRI fueron las de 1987, y el partido de oposición que más votos obtuvo fue el PAN, con 10.9 por ciento. Al año siguiente, en las elecciones federales de 1988, tras una lucha por la efectividad del sufragio, el PAN obtuvo su primer triunfo en el distrito I, correspondiente al municipio de Mérida (Ana Rosa Payán). Más tarde, en 1990, los signos del reacomodo político se hicieron visibles en la zona henequenera. El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ganó Cacalchén; el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ganó Huhí; y el PAN Mérida, Samahil y Tixpeual, y Tizimín, al oriente de la entidad. En otros municipios como Tetiz, Hunucmá, Muna y Dzidzantún, entre otros, las victorias del PRI fueron muy dudosas. Durante el miniperiodo (de Granja Ricalde, 1994-1995) se observó la misma tendencia, y en las elecciones de 1995 el PRI fue superado por los partidos de oposición en trece municipios.

Después de sufrir un fraude electoral en 1967, sólo hasta el pasado decenio de los ochenta, el PAN fue capaz de hacer sentir su influencia política en Yucatán, especialmente cuando en 1990 ganó la alcaldía de la capital, Mérida. De entonces a la fecha, sigue reteniendo el poder en esta ciudad, con una concentración de cerca de la mitad del electorado de la entidad, constituyendo así una cabeza de playa muy importante para los planes de expansión de dicho partido. El panismo yucateco siguió avanzando, como se observa en la gráfica 1, y no es hasta muy recientemente, en 1998 cuando sufre un retroceso electoral inesperado. Incluso el bastión urbano sufrió una derrota: el alcalde electo sacó una

ventaja de apenas 22,202 votos (similar a la de Cervera en 1995), más baja que el alcalde anterior.

Se puede decir que el PAN es el único de partido de oposición que ha creado células permanentes fuera del municipio de Mérida, pero no ha sido capaz de consolidar sus avances en el estado, pues de todos los municipios ganados durante estos diez años, solamente ha repetido triunfos consecutivos en la ciudad de Mérida y en Dzán.

El PRI, en cambio, por sus descabros tanto en elecciones federales como locales, si no dio por perdido el municipio de Mérida, rediseñó su estrategia electoral para concentrarse en revertir los avances de los partidos de oposición en los otros 105 municipios de la entidad.

Una de las experiencias de los estados en donde ha habido alternancia es que los primeros cambios no generan inercias positivas, y fácilmente se pueden revertir hacia las situaciones anteriores. La alternancia es sólo un primer paso necesario que posibilitará cambios para que el país vaya hacia un sistema democrático, el cual no se produce de forma automática. Por lo pronto, tenemos alternancia, pero el viejo sistema no se ha ido, y hoy se quiere restaurar en territorios regionales, y ahí está el caso de las elecciones en Tabasco del pasado agosto de 2000, en donde el PRI puso en práctica los viejos métodos del fraude y compra de votos, los cuales le permitieron ganar nuevamente las elecciones anuladas, por esos motivos, un año atrás.

Paralelamente, el gobernador Cervera y su grupo, desde los aparatos de gobierno promovieron el proselitismo hacia el PRI a la hora de la aplicación de las partidas federales del Ramo 33 y del Ramo 26 para los municipios. Otra vía un poco más directa de mantener la clientela fueron las “ayudas” para la compra de útiles escolares, de bicicletas, bombas para riego, incluso para algunos enseres domésticos, que se entregaba discrecionalmente a las amas de casa y a los trabajadores.

Todo ello rindió un éxito claro para el PRI-gobierno en su afán de retener el poder. Las políticas públicas centradas en la población más pobre han sido administradas muy bien con el objetivo de rescatar la clientela política rural que todavía conservaban. Adicionalmente, Cervera recurrió frecuentemente a un discurso “populista” de viejo cuño, combinado con la convocatoria hacia la modernización productiva.

La popularidad entre la población fue para Cervera su fuente de legitimidad, pues al ganar ámbitos de decisión las élites burocráticas locales, se tiende a reproducir el autoritarismo, cuyos andamiajes del presidencialismo en la escala local todavía son útiles. El autoritarismo mexicano, como ya se dijo, es un fenómeno complejo que recorre todos los niveles institucionales formales e informales. Así que en medio de un clima cargado de incertidumbre, los gobernadores, Victor M. Cervera y Roberto Madrazo en Tabasco, entre otros, procuraron legitimarse a través de una supuesta relación más directa con la población trabajadora más depauperada. Un esquema populista que ya ha dado buenos resultados a las élites burocráticas en el poder tanto en México como en los demás países de América Latina.

No obstante, bajo el fuego cruzado de las críticas, para Cervera no fue nada fácil lograr que los partidos de oposición le dieran una tregua. Aun cuando ganó limpiamente las elecciones de 1995, un juicio político,⁶ como la espada de Damocles, pendió todo el tiempo sobre sus hombros. Sus enemigos no lo apartaron de la mira, especialmente el *Diario de Yucatán*.

Para muchos, la cabeza de Cervera habría de rodar en 1998. En efecto, con una mayoría precaria en el Congreso local: de 25 diputados, 13 eran del PRI y 12 del PAN, y con

6 Es importante que el desafuero de un gobernador no proceda si antes no es aprobado por el Congreso local, sin este paso previo, el Congreso de la Unión no puede emprender un juicio político a un gobernador.

una Cámara de Diputados (federal) dominada por los partidos de oposición a partir de 1997, la posibilidad de un juicio político en su contra ganaba los encabezados de la prensa nacional. En varias ocasiones, los diputados federales y senadores del PAN lograron incluir en el orden del día de sus respectivas cámaras la discusión del caso Cervera.

De esa suerte, durante la primera mitad de su periodo, los partidos políticos de oposición subieron el tono beligerante, y a ratos se apropiaban del escenario político local. Hay que reconocer que poco a poco los congresos locales, en la medida que los partidos de oposición ganan curules, empiezan también a romper los grilletes que los atan al poder ejecutivo⁷. Indicador del proceso de transición política que recorre todo el país. En este contexto, el futuro del cerverismo estuvo en juego durante las elecciones locales de 1998.

Consciente de un posible escenario todavía más adverso, que podría surgir de los resultados electorales para renovar el Congreso local y los ayuntamientos, el propio Cervera Pacheco dirigió la campaña política de su partido. Al más puro estilo porfirista, de pronto, anticipadamente respecto de los años normales, los llamados programas de ayuda a la pobreza, como el Procampo, Progresía y otros, se multiplicaron y contaron con más recursos y las entregas se convertían en verdaderas verbenas⁸. Dicha estrategia resultó a tal punto eficaz que el PRI no sólo mantuvo, sino que recuperó escaños. El descabro del PAN incluyó la pérdida de las alcaldías de Umán, Tekax, Ticul, Hunucmá, Tixpeual y Samahil.

Llama la atención que aunque se le denunciaba públicamente, no hubo impedimentos legales para que Cervera hiciera proselitismo al estilo de los “viejos tiempos”. Dentro del PRI local, algunas figuras corporativas, como Gaspar

7 Véase el caso interesante de Baja California en (Martínez Herrera, 1999).

8 Estas actividades del gobernador Cervera, profusamente documentadas, pueden consultarse en el periódico *Por Esto!*, del 1 de enero al 30 de abril de 1998.

Antonio Xiu Cachón, representante de los indígenas mayas, un político gris, quien regresó por cuarta ocasión al Congreso local. Muchos municipios yucatecos son refractarios al cambio; no obstante, por la presencia aún tímida de los partidos de oposición, el papel del poder público municipal empieza a transformarse mediante la composición plural de los cabildos. El PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han logrado la presencia de al menos un regidor en los nuevos cabildos de 1998.

Por lo que se refiere al Congreso local, elPRI ganó trece de 25 escaños; el PAN obtuvo diez y el PRD solamente dos diputaciones de representación proporcional. Aparte de tales resultados, llama la atención y falta explicar por qué el índice de abstención del área metropolitana de la ciudad de Mérida fue de 40 por ciento, mientras que en los distritos rurales fue de solamente 28 por ciento, y no hubo acusaciones de fraude electoral. Con respecto a las elecciones de 1995, en términos globales elPAN, en 1998 registró una disminución de 18 mil votos, mientras que el PRI ganó 60 mil más.

Este éxito permitió al gobernador Cervera Pacheco librarse de la amenaza de juicio político y ejercer el poder a plenitud, aun bajo una tupida crítica de los partidos de oposición. Con ello, la capacidad política de Cervera Pacheco se agigantó y fue capaz de imponer a su candidato, Orlando Paredes Lara, un oscuro abogado cuyo único mérito era su lealtad.

Por razones de espacio no incluiré en este trabajo los episodios de las elecciones locales de 2001, ni el conflicto preelectoral, el llamado desacato de Cervera Pacheco y los diputados locales del PRI al Tribunal Federal Electoral. No obstante, dichos episodios están presentes en las breves reflexiones que formulo enseguida acerca de las tendencias políticas observadas a escala nacional y en Yucatán en particular, durante el periodo del cerverismo en Yucatán.

¿Hacia una nueva cultura política?

Cuando el piso del régimen de la revolución se cimbró, la presidencia de la república trató de recuperar la legitimidad perdida, cosa que fue confirmada por medio de los resultados en las urnas. Tras muchos intentos fallidos, finalmente perdió el poder. Parafraseando a Crespo (1992), podría decirse que los resultados electorales del 2 de julio de 2000 indicaron que el sistema político emanado de la revolución había perdido completamente sus bases de legitimación por gestión.

En 1988, el fraude electoral, siempre presente a lo largo de la historia posrevolucionaria, cobró por primera vez una dimensión distinta en la deslegitimación del gobierno entrante siempre priista. Dio la señal inequívoca de que la nueva legitimidad por gestión había sufrido un franco deterioro. La sorprendente fuerza electoral de la oposición obligaba al gobierno a recurrir con frecuencia a sus tradicionales métodos de alteración de resultados, pero la presencia de los partidos de oposición, tanto como la opinión pública, forzaron un cambio radical de las leyes electorales para crear órganos en este sentido sin injerencias del gobierno y en manos de los ciudadanos. Gracias a ello se reconoció el triunfo electoral de varios candidatos de los partidos de oposición; gracias a ello, finalmente en las elecciones presidenciales de 2000, el PRI fue derrotado por el candidato del PAN.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) pretendieron renovar sin éxito, la legitimidad perdida del Estado mexicano. No fueron capaces de dejar a un lado el ejercicio del poder político de forma autoritaria. Sin embargo, las experiencias electorales locales recientes en Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit y Chiapas, muestran que las élites del PRI están renovando su actitud, y algunos de ellos, que cambiaron de partido,

fueron capaces de ganar las elecciones como miembros de un partido político de oposición. El priismo disidente vence al priismo oficial. En el caso de Nayarit y Chiapas, mediante una coalición PAN-PRD, no así en los otros casos. En Morelos (2000), y recientemente en Yucatán (2001), el candidato del PAN ganó los comicios a gobernador. Esto significa que el electorado incondicional del sistema tiende a disminuir, mientras aumenta el electorado flotante, lo mismo en las ciudades que en el campo.

Evitaré una discusión del concepto de cultura política, y sin recurrir a las connotaciones ideológicas y etnocéntricas con que se ha rodeado el concepto, éste puede ser referido a la imagen que una sociedad tiene de su acción colectiva, y a la imagen, estilo y lenguaje de la acción política, o, en otros términos, al modo como se define en una sociedad determinada la matriz de relación entre el Estado (momento de la unidad, cristalización de relaciones de dominación, conjunto de instituciones públicas dotadas del monopolio legítimo de la coerción, todo eso a la vez), el régimen (mediación institucional entre el Estado y la sociedad que define el tipo de relación, la gente y el Estado y el modo como una sociedad se gobierna) y el sistema de actores sociales o sociedad civil (que define el momento de la diversidad y de la participación).

No es posible caracterizar nítidamente la nueva cultura política mexicana, ya que varía para cada contexto histórico-social y adquiere matices muy diferentes según el sector o actor social del que se habla. Pero sí por lo menos podemos ilustrar, indicando algunos de los elementos que emergen, a veces vaga y contradictoriamente.

Entre ellos, el paso de la política integrista y religiosa a la negociación; el paso de partidos ideológicos o maquinarias electorales a organizaciones programáticas; el cuestionamiento de las formas tradicionales de representación; el rechazo a las ideologías globalizadoras y su reemplazo por

utopías parciales; la búsqueda simultánea de cambio y orden, redefiniendo los términos del antagonismo y conflictos sociales; la revaloración de las cuestiones de régimen político, pero el alejamiento de las típicas formas políticas profesionales y de las más fanáticas o heroicas, y la afirmación de la capacidad propia para resolver los problemas sin renunciar al papel benefactor del Estado.

Hay dos polos extremos que parecen tomar el relevo de la cultura populista clásica dominante durante muchos decenios en el México contemporáneo. En primer lugar una negación de la política a partir del extremo modernizante del racionalismo y de la lógica instrumental, que reemplaza la acción colectiva por la razón tecnocrática, sobre todo en su versión neoliberal. Aquí, los actores sociales, la sociedad civil, la acción colectiva de los movimientos sociales, son reemplazados por el traslado al campo político del cálculo económico racional tipo costo/beneficio, incentivos, negociación, a partir de la empiria de recursos y no de metas.

En la medida en que el principio tecnocrático tiende a ser elitista y a sustituir a los actores sociales, en la historia real tiende siempre a acompañarse del principio corporativo, que ve a los actores universalizando su propia particularidad, y por lo tanto, universalizando su propio principio de acción instrumental.

Las transiciones, pero especialmente las consolidaciones democráticas, por la vía exclusiva de concertaciones económico-sociales, o de creación de sistemas y organismos autorregulatorios en diversos ámbitos de la vida social, son una buena ilustración de esta combinación tecnocrático-corporativa con ideología libremercadista, desconfiada de la acción política.

En segundo lugar, una negación de la política a partir del extremo irracionalista, que reemplaza la acción política por el principio universalizante de la lógica expresivo-

simbólica. La acción colectiva pierde aquí su carácter político, para ser reemplazada por la acción moral o religiosa. El comunitarismo de base religiosa o étnica, el mesianismo guerrillero, los nuevos ideologismos, etcétera, son todos tipos de acción que rechazan la alteridad y proyectan unilateralmente a la sociedad el sentimiento particularista del “nosotros”, en una recreación del fundamentalismo o integrismo.

Entre ambos extremos, y combinando de algún modo elementos de ellos, resurgen nostalgias populistas, clientelistas o partidistas, pero ya sin la convocatoria de los grandes proyectos ideológicos o de las movilizaciones de alto nivel de integración, sino más bien como formas fragmentarias acompañadas, a veces, de sus correlatos anónimos, apáticos, atomísticos y, en algunos casos, de componentes delictivos.

La visión tecnocrática neoliberal anuncia el fin de la historia, el triunfo definitivo de la lógica del mercado como único motor de desarrollo y principio de la vida social y desaparacimiento progresivo del Estado. La visión comunitarista anuncia el comienzo de una nueva historia marcada por el reino de la verdad establecido por un nosotros particularista.

En medio de tal tensión, una cultura de participación ciudadana un poco tímida, incapaz de evitar que la historia se repita, se abre paso. Desde 1988, el partido en el poder el PRI, vio contestada su hegemonía en las elecciones federales gracias al fortalecimiento de la oposición. Este susto generó durante los primeros dos años del presidente Carlos Salinas de Gortari un proceso de reforma institucional en dirección democrática; sin embargo, dicho proceso se estancó e incluso retrocedió.

Ciertamente, mucho se ha logrado en materia de legislación electoral, e incluso el discurso de la clase política se ha vuelto mucho más democrático que en el pasado, pero ni

las reglas del juego político ni las características tradicionales de las principales estructuras de autoridad del régimen político mexicano —me refiero ahora al corporativismo, a la autonomía municipal— se han transformado a la par que las expectativas sociales de un cambio democrático efectivo. Mejor todavía, puede decirse que lo mismo se observa la continuidad como la transformación de algunos rasgos dominantes del régimen mexicano.

Admitiendo aUn que hoy existe mayor competencia partidista que hace veinte años o que la normativa vigente en materia electoral ofrece mayores garantías para la participación política, de ello no se deriva para el régimen una calidad de democrático. Un régimen cuasidemocrático como el mexicano confiere a un cuerpo oficial el derecho de autorizar la participación de los partidos políticos, casi siempre en función de la amenaza que pudieran representar a la continuidad.

De modo que el régimen mexicano vive un proceso de transición, pero todavía falta mucho camino por recorrer para institucionalizar la democracia en todo el territorio y entre todos los habitantes. Desafortunadamente, los partidos políticos mexicanos de oposición tienden a seguir una estrategia que no garantiza un acercamiento permanente con las mayorías que todavía siguen mediatizadas por las promesas del régimen agonizante. Muchos partidos políticos resurgen sólo en tiempos de elecciones. Algunos actúan movidos más por el beneficio que obtienen del patronazgo del gobierno que por ideología.

El ciudadano mexicano en la palestra

Como dije antes, no todo va mal en el país. En medio de la transición política se observa un fenómeno sumamente interesante, tardío por lo demás. El ciudadano mexicano tardó un siglo en advertir su condición de súbdito. Era pa-

sivo, obediente, conformista, indiferente, temeroso y a veces cínico, tal vez porque en el fondo ignoraba la posibilidad misma de un paradigma distinto. ¿Cómo lo descubrió? La historia de esa revelación está por escribirse.

Algunos piensan que el parteaguas de ese proceso está en la lucha estudiantil de los años sesenta. Otros sugieren que tal vez hemos exagerado la contribución del movimiento estudiantil del 68 en el proceso. Fue demasiado contestatario, político y violento. En el reacomodo de la conciencia colectiva, quizá fue más importante el terremoto de 1985, porque de un tajo brutal planteó la necesidad de que la sociedad participe en la forja de su destino más urgente y concreto: la salvación de su propia vida.

Ese despertar de la conciencia social —restringido, es verdad, a la ciudad de México, pero no por eso menos trascendente— coincidió con otro proceso paralelo: el reconocimiento de la democracia como la única vía de construcción política nacional. Su historia tampoco está escrita en ninguna de las acepciones de la palabra: ni como texto ni como conquista definitiva. Fue —y en gran medida sigue siendo— un proceso difícil por factores de diversa índole, como son los intereses residuales de caciques locales, regionales, sectoriales y nacionales, o la inercia de una mentalidad política que tiende a recrear el viejo paradigma de subordinación voluntaria o coercitiva.

Pero no hay duda de que desde los años ochenta —y a raíz de los sucesivos agravios económicos— la toma de conciencia ha ido en aumento, desde la elección de Chihuahua en 1986, cuando la democracia parecía un sueño romántico, hasta el 2 de julio de 2000, fecha en verdad histórica en la que el ciudadano decidió tomar en serio su voto, lo ejerció en un marco de paz y con notable sensatez republicana.

Gracias a la confluencia de esos dos procesos de concienciación ciudadana —uno social, otro político—, en México transitamos ahora por uno de esos extraños, irre-

petibles “momentos plásticos” en los que la historia parece materia dúctil a la voluntad inteligente de los hombres.

Debido a la presencia de una ciudadanía, los gobernantes pueden levantar literalmente el espíritu público. Pueden trazar una visión clara, accesible, mensurable de futuro, y convocar el entusiasmo ciudadano para trabajar por ella. Pueden dignificar y fortalecer el sitio de México en el mundo y hacerlo un lugar propicio para una inversión variada y productiva de largo plazo. Pueden tener la autoridad para conjurar ciertas crisis y arbitrar conflictos. Puede oponer la ética de las soluciones reales a las declarativas, y las obras concretas, pequeñas, innovadoras, imaginativas y útiles a las de relumbrón. Pueden introducir criterios de racionalidad y prioridad en la administración pública y comenzar una labor pausada de descentralización y *despiramidación*, puede desempeñar el papel de un promotor del bienestar nacional a través de cambios en verdad revolucionarios, sobre todo en la educación, el combate a la pobreza y la paciente integración de un aparato eficaz de justicia y seguridad.

Un gobernante podrán intentar todo eso sin degradar su investidura en el culto a la personalidad, ni erigirse o permitir que se le erija en el hombre providencial. Esa conciencia de los límites, los propios y los del país, deberá comunicar la clase política a los ciudadanos mexicanos.

La otra parte fundamental no le corresponde al gobierno, sino a ese universo, que de modo abstracto denominamos “sociedad civil”. Hay quien la concibe y practica de manera militante, como una alternativa de política directa a la labor supuestamente anacrónica de los partidos. Para estas personas, la “sociedad civil” sólo se expresa en marchas, protestas, manifestaciones, bloqueos, mantas y cantos callejeros. La arena política es un ámbito legítimo para las organizaciones sociales, pero éstas no pueden sustituir la labor de los partidos ni violar las libertades y el orden

republicano y democrático en nombre de una vaga “voluntad general” que no pasa por el voto de los ciudadanos.

Porque la sociedad civil no sólo es infinitamente más numerosa que la de esas organizaciones militantes, sino también más propositiva y desinteresada. Gabriel Zaid ha compilado un directorio de obras sociales privadas, pequeños o grandes grupos preocupados por los demás. Son 300, sólo en el Distrito Federal. Con ese ejemplo en mente, el gobierno no podría revertir uno de los más graves equívocos del siglo XX en México: el de la expropiación estatal del bien común. Lo que en los siglos anteriores hacían la Corona, el Estado, la Iglesia, las organizaciones sociales y en última instancia los individuos, en el siglo XX lo acaparó el Estado.

No se trata, por supuesto, de abolir el Seguro Social ni ninguna otra institución similar de asistencia pública. Se trata de abrir esos ámbitos a la creatividad e iniciativa de la sociedad civil. Se trata de quitarle al “ogro” el monopolio de la “filantropía”, vigilar sus labores filantrópicas y apoyar, alentar, educar a la sociedad para que de manera concertada se ocupe de sí misma. La filosofía básica está a la mano: basta aplicar el principio de la subsidiariedad —tan central en la ideología del PAN— a la vida activa del país, dejando que el individuo se realice sin interferencia excesiva de la familia, que la familia haga lo propio sin el municipio, el municipio sin el estado, los estados sin la federación.

Hay zonas más profundas de nuestra cultura política que permanecerán por mucho tiempo refractarias al nuevo paradigma de ciudadanía. La preeminencia del Estado sobre los individuos no es una convención de nuestra vida pública; es, en cierta medida, su premisa fundacional. En el universo sajón, como vio Tocqueville para Estados Unidos, la fórmula se invierte: “el individuo es el mejor y el único juez de su interés particular; la sociedad no tiene derecho a dirigir sus acciones, sino cuando se siente lesionada o cuando tiene necesidad de reclamar su ayuda”. Mientras el mundo



actual propende al segundo paradigma, nuestra tradición tiende a retenernos en el segundo.

En efecto, hoy la confrontación de nuestros problemas y su posible alivio pasa necesariamente por la confluencia de un buen gobierno y una sociedad civil informada y alerta, ambos bajo un arreglo histórico más horizontal, más responsable y compartido. Ese nosotros solidario en el que la sumisión abra el paso a la ciudadanía, ¿será la plataforma moral de nuestro siglo XXI?

Conclusión

A través de este breve análisis del desempeño político de un gobernador se pudo observar algunos de los factores que tienden a debilitar los mecanismos que históricamente permitieron retener el poder centralizado. Igualmente es posible entender la paradoja de un partido político, la del PRI, que cambia justamente para no cambiar su vocación autoritaria.

Falta, es cierto, una participación ciudadana más pareja que ahora se concentra en las urbes, para terminar de derribar la pared, a la democracia de fachada que todavía se observa en varias partes del país. Estaremos en presencia de una nueva cultura política cuando los ciudadanos no sólo emitan un voto razonado, esto es, un voto por el que consideren “menos peor” de los partidos, sino que participen activamente en las organizaciones civiles. Sólo así quedaría atrás la costumbre porfiriana, que se ha prolongada hasta nuestros días, de emitir un voto en favor del partido de gobierno a cambio de pequeños satisfactores (machetes, bombas de agua, lavadoras, bicicletas), a veces peor aún por tortas y *coca-colas*.

La transición política camina a paso lento por donde sobreviven aún estructuras y mentalidades sobre las que ha sido montado el autoritarismo. Herencia de otra paradoja

del divorcio entre teoría y práctica: pese a las premisas revolucionarias que inspiraron la *Constitución* de 1917, su opuesto, la ideología unificadora, adquirió un lugar privilegiado en el terreno de la práctica, a tal punto que formó las bases para un acceso excluyente al poder político, lo que a su vez obstaculizó el desarrollo del pluralismo ideológico. El desarrollo de una ciudadanía activa fue frenado por el Estado, que adquirió una jurisdicción crucial sobre los recursos del país y la autoridad para distribuirlos. Esta secuela, como vimos, todavía está muy arraigada en el agro y es aprovechada para el ejercicio del poder.

Sin duda, Víctor M. Cervera Pacheco es un político con gran influencia regional, que agrupa gente a su alrededor como ningún otro personaje del PRI en el Sur y probablemente en todo el país. Constituye un ejemplo sumamente interesantes para el análisis de las nuevas expresiones del poder político regional mexicano, que amenaza, pero no liquida al centralismo.

La biografía política de Cervera Pacheco —que falta escribir— permitirá entender con un poco más de profundidad el proceso de transición política que vive México. El ejercicio del poder desplegado por hombres como él muestra que si bien el control hegemónico del PRI por la vía del centralismo y el presidencialismo se ha perdido en el ámbito nacional, hay gente capaz de intentar revertirlo desde las regiones. Más todavía, sorprende que aquellas viejas artimañas para mantener el voto ciudadano cautivo, aunque ampliamente criticadas por los partidos de oposición y algunos medios de comunicación, todavía se hagan y funcionen eficientemente.

Por otra parte, queda claro que la división político-administrativa por entidades define con claridad las fronteras del nuevo regionalismo político encabezado por las élites burocráticas. Esto es, que la transición política de principios de este siglo XXI coloca al espacio regional como crítico ante el desvanecimiento del poder centralizado.

El PRI se resiste a reconocer el carácter antidemocrático de sus orígenes, e intenta sostener la tesis de la evolución natural que llevaría al partido a convertirse en una institución democrática. Para el viejo régimen de la revolución, tal regionalismo tiene sus ventajas frente al centralismo, porque constituye un vehículo importante para recuperar la cohesión del régimen. Y sus limitaciones, porque revive el satanizado fenómeno del clientelismo que se liga de manera inextricable al cacique, al hombre fuerte, cuyo mando característicamente informal, personal y a menudo arbitrario es apuntalado por sus partidarios.

Este ejercicio del poder político en la escala regional, a veces con matices menos personales, cobra peso en la dinámica política nacional, y sus alcances parecen muy importantes. Tan así es, que los ex gobernadores fueron los protagonistas principales de la contienda electoral por la presidencia de la república en 2000. Y por otra parte, un tecnócrata puro, Ernesto Zedillo Ponce de León, primero perdió por completo la hegemonía presidencial y luego el liderazgo de los priistas.

Sin asimilar plenamente la derrota de las elecciones presidenciales, a tal grado de interpretarla como “el error de julio”, las élites del PRI pretenden minimizar la pérdida del poder, limitándola sólo a una equivocación y no al rechazo de la sociedad a 71 años de gobierno. En agosto, los 17 gobernadores priistas decidieron constituir un Foro Nacional de Gobernadores Priistas (*La Jornada*, 26 de agosto de 2000), con el objeto de asumir el liderazgo moral de su partido, que quedó vacante después del 1 de diciembre, cuando el presidente Zedillo entregó el poder a Vicente Fox, del Partido Acción Nacional. Han dicho que exigirán un federalismo real en el que se respete la autonomía de sus entidades. Federalismo real, renovado o auténtico, éste será sin duda el tema que no podrá evadir un proceso democrático que se abre paso irreversiblemente.

- Aguilar Laviada, Marianela y Milagros Herrero Buchanan (1996), "Yucatán 95: elecciones en un contexto de transición", en *El Cotidiano*, núm. 75, marzo-abril.
- Aguilar Villanueva, Luis F. (1996), "El federalismo mexicano: funcionamiento y tareas pendientes", en *Revista mexicana de sociología*, año LVIII, núm. 3, julio-septiembre.
- Alvarado Mendoza, Arturo et al. (1997), "Partido Revolucionario Institucional: Contexto, situación política y escenarios electorales", en *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, vol. XIII, núm. 2, Summer.
- Alvarado Mendoza, Arturo (1996), "Gobernadores y federalismo mexicano", en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 58, núm. 3, junio-septiembre.
- Azaïs Christian (1999), "Temps, travail et territoire", en *Revue d'Economie Regionale et Urbaine*, Francia, octubre.
- Baños Ramírez, Othón (1995), "El Estado neoliberal contra el ejido histórico henequenero", en *Nueva Antropología*, vol. XIV, núm. 47, México, marzo.
- Baños Ramírez, Othón (1996), "El regreso (¿tardío?) del ogro filantrópico. El caso de la zona henequenera de Yucatán", en *Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán*, núm. 196, enero-junio.
- Bazdresch, Carlos, Nisso Bucay, Nora Lustig y Soledad Loaeza, comps (1992), "México: auge, crisis y ajuste", en *El trimestre económico*, Fondo de Cultura Económica, México DF.
- Bizberg, Ilán (1999), "Las transformaciones del poder político en México", en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 61, núm. 3, julio-septiembre.
- Bolio, Francisco José (1984), *Yucatán y los orígenes del nuevo Estado mexicano*, México, Era.
- Brannon, Jeffery and Eric N. Baklanoff (1987), *The Political Economy of Yucatán's Henequen Industry. Agrarian Reform & Public Enterprise in Mexico*, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, Alabama.

Bibliografía

- Cerutti, Mario (1990), "Contribuciones recientes y relevancia de la investigación regional sobre la segunda parte del siglo XIX" en Carlos Martínez Assad, *Balance y perspectivas de los estudios regionales en México*, México, CIIH y Miguel Ángel Porrúa.
- Crespo, José Antonio (1992), "Crisis económica: crisis de legitimidad", en Carlos Bazdresch et al., *México. Auge, crisis y ajuste*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Durand Ponte, Víctor Manuel (1995), "La cultura autoritaria en México", *Revista Mexicana de Sociología*, año LVII, núm. 3, julio-septiembre.
- González Casanova, Pablo, coord. (1993), *Las elecciones en México. Evolución y perspectivas*, México, Siglo XXI Editores.
- González Oropeza, Manuel (1993), "Acceso y pérdida del poder de los gobernadores", en Pablo González Casanova, coord., *Las elecciones en México. Evolución y perspectivas*, México, Siglo XXI Editores.
- Gouëset, Vincent (1997), "Impacto territorial y globalización en Mérida", en *Ciudades*, núm. 34, abril-junio.
- Habermas, Jürgen (1997), "Hannah Arendt's Communications Concept of Power", en Steven Lukes, comp., *Power*, EU, New York University Press, N. York.
- Hiernaux Nicolas, Daniel (1993), "Región, regionalismo y modernización en América Latina", en *Ciudades*, núm. 18, abril-junio.
- Hiernaux Nicolas, Daniel (1994), "Apertura económica y regiones. ¿Nuevas perspectivas?", en *Ciudades*, núm. 22, abril-junio.
- Joseph, Gilbert M. *Revolución desde afuera. Yucatán, México y los Estados Unidos, 1880-1924*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Carlos Martínez Assad (1990), "Los estudios regionales y su impacto en las ciencias Sociales", en Carlos Martínez Assad, editor, *Balance y perspectivas de los estudios regionales en México*, México, CIIH y Miguel Ángel Porrúa.

- Martínez Herrera, Leopoldo (1999), "Los congresos locales, ¿una avanzada democrática?", en *Este País*, núm. 28, octubre.
- Meyer, Lorenzo (1991), "El presidencialismo. Del populismo al neoliberalismo", en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 1, enero-marzo.
- Molinar Horcasitas, Juan (1991), "Escuelas de interpretación del sistema político mexicano", en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 1, enero-marzo.
- Pacheco Méndez, Guadalupe (2000), "De la hegemonía a la regionalización electoral: el sistema de partidos en México, 1979-1997", en *Estudios Sociológicos*, vol. XVIII, núm. 53, mayo-agosto.
- Pansters, Wil (1998), "La transición a fuego cruzado: un nuevo análisis de la política mexicana contemporánea", en *Estudios Sociológicos*, vol. XVI, núm. 48, septiembre-diciembre.
- Reyes Soto, Marisol (1995), "Gobernabilidad y elecciones en Yucatán", en *El Cotidiano*, núm. 72, octubre.
- Vallado Fajardo, Iván (1999), "Del PRI natural al pluripartidismo real en el campo yucateco", en *Unicornio*, suplemento cultural de *Por Esto!*, año 9, núm. 420, domingo 16 de mayo, Mérida Yucatán.
- Zuleta Miranda, María Cecilia (1995), "El federalismo en Yucatán: política y militarización (1840-1846)", en *Secuencia*, nueva época, núm. 31, enero-abril.

Bibliografía